

tadas. Devuélvansolas actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca. Asi por mayoría de votos lo decretaron los CC Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. *José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 20 de 1873 *Lic. Enrique Landa* oficial mayor

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por D. Manuel del Sol, contra el Administrador de Rentas del Distrito de Cuernavaca, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en 20 de Marzo último, la Administracion de Rentas de este Distrito, cuotizó al súbdito español Don Manuel del Sol en la cantidad de 270 pesos, que debía pagar desde esa fecha hasta el fin del año, por contribucion sobre su venta de mulas, cuya realizacion en todo el año se calculó en 6750 pesos. En la boleta que con tal motivo libró la Administracion al Sr. del Sol, y que obra á fojas 1 de estos autos, le advirtió que si no estaba conforme con la cuotizacion hecha por el Administrador, podía reclamar ante la autoridad

política del Distrito dentro del término de cuatro dias contados desde aquella fecha; y el dia 22 presentó aquel Sr. un ocurso en papel simple á la Jefatura política, diciendo, que no era exacto que tuviese jiro alguno de venta de mulas y ni aun había pensado vender ó comprar una esclta, por lo que pedía se le retirase la boleta y no se le volviera á molestar con ese motivo, pues la cuotizacion era nula por no existir la base en que debiera apoyarse. La Jefatura acordó se devolviese el ocurso al interesado por no estar en las facultades de aquella oficina resolver en ningun sentido la reclamacion, y segun el oficio de fojas 2, se devolvió el ocurso al Sr. del Sol el dia 24. Con fecha 25, la Administracion libró el mandamiento que obra á fojas 4, previniéndole, que si en el término de tres dias, no enteraba la cantidad de \$85.55 que adeudaba por contribuciones sobre su realizacion de mulas, se procedería al embargo, exigiéndose ademas, los recargos que determina la ley.

Segun la liquidacion que obra en ese mismo documento, le suma expresada se forma de las cantidades siguientes: \$12.50 por derecho de patente; \$37.50 por recargo de tres tantos, conforme al artículo 16 de la ley de 26 de Octubre de 1872; \$11.28 contribucion de 4 por ciento correspondiente á los dias del 20 al 31 del actual; \$16.45 por contribucion federal; y \$2.82 recargo del 6½ por ciento de cobranza. Al dia siguiente, presentó el Sr. Sol un nuevo ocurso á la Administracion, pidiendo se mandase suspender el embargo y se le eximiese del pago de la contribucion, por no existir el jiro sobre que se impuso. La Administracion dejó sin proveer este ocurso; y el 28 trabó ejecucion en \$17.33 que se encontraron en los cajones de la tienda del Sr. del Sol, producto de sus ventas, y en treinta piezas de mantas de la fábrica "La Fama", notificándole al dia siguiente, que el primero de Abril se procedería al remate de las mantas embargadas. En 29 del mismo Marzo, presentó escrito el Sr. del Sol á este Juzgado quejándose

dose, de que con los procedimientos referidos, se violaron las garantías que otorgan los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución, y pidiendo se mandase suspender desde luego el acto reclamado, y se lo amparase en definitiva, en el goce de las garantías citadas.

Decretada la suspensión el mismo día, en el informe con justificación rendido el 2 del actual, dice la autoridad ejecutora: que en el acto reclamado, no hubo violación alguna de las garantías individuales; que sus procedimientos fueron ajustados á la ley, y la declaración de si el Sr. del Sol está ó no comido en las disposiciones de la ley de 26 de Octubre de 1872, corresponde al Juez de primera instancia del Distrito, y no á la Justicia federal, por lo que podía que al denegarse el amparo, se impusiera al quejoso la multa del artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Al informe con justificación se acompañó testimonio de las declaraciones que con el carácter de información ad perpetuum, recibió el Juzgado primero de primera instancia de este Distrito en 31 de Marzo, á petición del C. Administrador de Rentas, y en ellas, el C. Fernando Andrade y Parraga, Gefe político, asegura que Don Manuel del Sol confesó ante la Gefatura, haber vendido y entregado mulas á los arrendatarios de la Hacienda de Acamipa y al Administrador de San Nicolas. El C. Bonifacio Castelló dijo, que el mismo Sr. del Sol le vendió 42 mulas en el mes de Setiembre último, á \$30 cada una. El C. Marcial Arámbaro, afirmó haber otorgado libranza á favor del Sol por mulas que este vendió á D. Juan Salgado, dueño de la Hacienda de Zacapulco; y por último, el C. Lic. D. Vicente Rodríguez Villanueva, segundo Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó, que el día 2 de Febrero, vió pasar por el puente de Amealco á D. Manuel del Sol, conduciendo una grande partida de mulas.

Examinando estos hechos, comprobados

tanto con los documentos que presentó el quejoso adjuntos á su escrito, como con el informe de la autoridad ejecutora, aparece desde luego, que si D. Manuel del Sol tuvo un giro de venta de mulas establecido desde Setiembre del año próximo pasado y continuó con el todavía en el mes de Febrero, pudiendo la Administración de Rentas exigirle desde entonces el pago de la patente y contribuciones, y siendo indispensable para que continuara ese comercio, el pago del derecho de patente antes del primero de Enero, conforme á la ley de 26 de Octubre de 1872, que en la última parte de su artículo 14 previene: "El que dentro de los tres primeros días de Enero, no ocurriere al Administrador ó á su agente para obtener la patente, y diere lugar á que se le envíe, incurrirá en la pena del tres tanto de la cuota fija que debía satisfacer." Es de notarse y llama la atención, que haya venido á exigirse ese pago hasta el 20 de Marzo, cuando segun el informe del C. Administrador de Rentas (fojas 15 vuelta y 16), puede ser cierto que D. Manuel del Sol no ejerce ni ejercerá el giro por que se le cuotizaba.

El artículo noveno de la citada ley, establece, que terminada la cuotización precisamente el 30 del mismo Noviembre, los agentes ó Administradores entregarían desde luego al contribuyente, un ejemplar de la manifestación hecha, ó al que no la hubiere presentado, uno de la boleta, antes del 5 de Diciembre siguiente; y el Administrador que no cumpliera, será multado como en los casos relativos al impuesto sobre elaboración; y segun el artículo 10, el causante que no se conformare con la cuota que le hubiere impuesto el Administrador, podía antes del 15 de Diciembre reclamar ante la autoridad política del Distrito, quien debía proceder en los términos y forma prescritos para las reclamaciones del impuesto á la elaboración, es decir: nombrando un perito y oír al interesado, para determinar la cantidad que debiera asignarse (artículo sexto); y en el caso de discordia en el dictamen de los pe-

ritos dar cuenta al Juzgado de primera instancia para que este nombrara un tercer perito, que decidiera definitivamente, cual debía ser la cuotización. (artículo décimo)

De manera, que la cuotización por el Administrador, debió hacerse antes del 5 de Diciembre, supuesto que el jiro existía con anterioridad, para dejar expedito el recurso á la autoridad política que solo pudo intentarse antes del 15 del mismo Diciembre, y denegado todo recurso ulterior por el lapso de esos términos, las facultades del Administrador para hacer la cuotización, quedaron restringidas conforme al artículo 15 al único caso de la apertura durante el año fiscal de un nuevo jiro ó establecimiento. En ese caso, señalada la cuota por el Administrador asociado de dos vecinos inteligentes, si el causante no estuviere conforme, puede reclamar dentro de los tres días siguientes, siguiéndose los procedimientos que marca el mismo artículo 15; y solo se le puede exigir la cuota desde luego, si estuviere conforme ó desde que se confirme si hubiere reclamado; pero esto en el caso de que se presente haciendo la manifestación que previene el artículo sétimo, y bajo el concepto de que no se podrá abrir el jiro ó establecimiento sin la patente respectiva; y en caso de que dé lugar á que se le remita por el Administrador, queda sujeto sin recurso ulterior á pagar la cuota que se le asigne con los recargos del artículo 14, según el 16 de la repetida ley. Pero es un hecho confesado por el C. Administrador, que D. Manuel del Sel, no abrió ni trató de establecer por primera vez, el jiro sobre que recaía la cuotización, sino que se suponía subsistente por haberlo ejercido el Señor del Sel durante una parte del año próximo anterior y el principio del actual, advirtiéndolo, hasta la probabilidad de que ese jiro no se ejerciera actualmente ni continuara para lo sucesivo.

La advertencia de la boleta que obra á fojas 1, parece indicar que la cuotización se hizo bajo el concepto de que el giro se hubiera establecido hasta entonces; pero no

confirmado ese supuesto, no estaba realmente en las facultades de la Gefatura política resolver sobre el ocuso que en cumplimiento de esa advertencia le presentó el Señor del Sel en 21 de Marzo. Efectivamente, el término para ocurrir á la Gefatura reclamando sobre las cuotizaciones de giros establecidos, había espirado desde el 15 de Diciembre, el artículo 16 deniega todo recurso en el caso de la apertura de un nuevo giro durante el año fiscal, sin la patente respectiva, y las facultades de la autoridad política están circunscritas al nombramiento de un perito para la reducción de la cuota asignada por el administrador; pero no se extienden hasta determinar sobre la procedencia del impuesto.

El artículo 18 de la ley de Hacienda en que se apoyan los procedimientos que vengo examinando, proviene, que la clausura de los giros mercantiles y establecimientos industriales debe justificarse ante la administración de rentas; el artículo 19 establece, que solo podrán alterarse las cuotas señaladas entre otros casos, cuando el giro ó establecimiento consistente en ganado, tenga disminución ó aumento en el número de animales que lo forman, y conforme al 21, la cesación de la cuota para el contribuyente en el caso de clausura de giros ó establecimientos, tendrá lugar desde la fecha en que se presente al administrador la certificación prevenida por el artículo 18; y si ésta se presenta después del día 10, la exoneración de pago solo tendrá efecto desde el mes siguiente al en que se verifique la clausura. No existe prevención alguna relativa al ocuso ante los tribunales, y pudo por consiguiente proceder la petición al administrador de rentas para que retirara y declararse sin efecto la cuotización, puesto que en el caso de clausura del jiro, era el único competente para declarar, la acreditada y exonerar al causante de los pagos sucesivos. Pero como antes se ha dicho el C. administrador dejó sin proveer el escrito que le presentó D. Manuel

del Sel en 26 de Marzo, y que según su informe se limitó (fogar 18 vuelta y 9) á agregar á sus antecedentes.

Desatendidas, pues, las reclamaciones del quejoso, la administración procedió á ejecutarlo en uso de la facultad económica coactiva que le está cometida, no obstante que las cuotas solo deben cobrarse conforme á la ley, desde que se confirma, ó por la aquiescencia del contribuyente, ó por la resolución de las reclamaciones que hubiere intentado en el caso contrario.

¿Envuelven estos procedimientos la violación de las garantías individuales? El artículo octavo de la Constitución, previene: "es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas, solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A cada petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad á quien se haya dirigido, y esta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario." Tenemos comprobado que D. Manuel del Sel presentó un recurso al ciudadano administrador de rentas sobre asunto de la administración que es á su cargo, y relativo al procedimiento de cobranza en que estaba personalmente interesado el mismo Sr. del Sel; y á ese recurso no recayó acuerdo escrito de ninguna especie, ni produjo resultado alguno para el peticionario. Se violó, pues, la garantía que sanciona el artículo constitucional citado, y es indudable que el administrador de rentas procedía como autoridad en el negocio á que se refería el recurso que dejó sin acordar, y no estaba exento de la obligación que impone el artículo constitucional citado; primero, por la latitud de sus términos; y además, porque la misma ley de 26 de Octubre le concede el uso de la facultad económica coactiva para exigir el pago de los impuestos, la de cuotizar á los contribuyentes y declarar la cesación del pago de los impuestos en el caso de clausura de los giros y establecimientos.

El artículo centesco de la Constitución, previene en su segunda parte: "Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley;" y el ciudadano administrador de rentas dice en su informe con justificación, que cuotizó á D. Manuel del Sel y este debe pagar la contribución asignada conforme al artículo diez y seis de la ley de 26 de Octubre, por solo ejercer un giro mercantil sin la patente respectiva, pues tal es la pena señalada á la defraudación y á la infracción de la ley. (fojas diez y ocho.)

Pero ya hemos visto que D. Manuel del Sel no abrió ni estableció por primera vez en el mes de Marzo el giro de venta de mulas por que se le cuotizó; y siendo ese el único caso en que tendrá aplicación el artículo diez y seis citado, es claro que no estaba en las facultades del administrador imponer como pena el pago de los impuestos desde entonces y por todo el año, con tanta mayor razón, cuanto que en el mismo informe se expresa que puede ser cierto que D. Manuel del Sel, no ejerza ni ejercerá el giro, cuya existencia es indispensable para que puedan causarse las contribuciones. Si el objeto del ciudadano administrador era castigar una defraudación anterior, pero no actual, por el hecho de que D. Manuel del Sel hubiera tenido el giro de venta de mulas sin la patente y sin el pago de las contribuciones, no encuentro ni la razón de su competencia para imponer la pena, ni el fundamento para que esta pudiera ser el pago de impuestos sucesivos que no se causaron. En ese caso el ciudadano administrador ha impuesto una pena por delito ó falta que solo está comprobada por él; es decir, ha juzgado y sentenciado sin que pueda considerarse como competente al efecto, ni conforme á las leyes del Estado, el funcionario á quien está encomendado el ejercicio del poder judicial.

El artículo 16 de la Constitución esta-

bloco: «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento," y concluidas las facultades del administrador para cuotizar los giros establecidos con la única escepcion á que se refieren los artículos quince y diez y seis de la ley de 23 de Octubre, con la expedicion de la boleta providencial que obra á fojas una, originó una molestia á D. Manuel del Sol, sin que al efecto tuviera facultad legal, puesto que segun su propia informacion, el giro porque cuotizaba á aquel señor, habia subsistido desde Setiembre próximo pasado hasta el mes de Febrero anterior. La cuotizacion en el mes de Marzo y bajo el concepto de que se tratara de un giro abierto el año anterior, priva al contribuyente del recurso ante la autoridad política que solo pudo intentarse hasta el 15 de Diciembre, y no puede ser legal ni justo que la administracion reservara las cuotizaciones para obligar al contribuyente á pagar la cuota que le asignara sin recurso ulterior de ninguna especie.

Por último, el artículo 17 de la Constitucion, previene, que nadie podrá ejercer violencia para reclamar su derecho; y la autoridad que priva de un recurso establecido por la ley, como sucedió, reservando la cuotizacion hasta el mes de Marzo en que ya no se podia ocurrir á la autoridad política, emplea un procedimiento violento, por mas que no se trate de sus propios intereses, sino de los del erario del Estado cuya recaudacion le está encomendada.

Por todo lo que el promotor pide, se declare en definitiva: que la justicia de la Union ampara y protege á D. Manuel del Sol en el goce de las garantías indicadas, contra los procedimientos de la administracion de rentas reclamados en este recurso, y se dé aviso á la administracion de la renta del papel sellado de la infraccion cometida en el ocurso que obra á fojas 3, para

que proceda conforme á sus facultades; y en caso de que crea conveniente el esclarecimiento ó comprobacion de los hechos, se sirva previamente mandar que se reciba este negocio á prueba por un término común que no exceda de ocho dias, conforme al artículo diez de la ley de 20 de Enero de 1869.

Cuernavaca, Abril 15 de 1873.—Nicolás Medina.

La copia que certifico. Cuernavaca, Mayo tres de mil ochocientos setenta y tres.—*J. Anastasio Izgo*, secretario.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Cuernavaca, Mayo 3 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por D. Manuel del Sol contra los procedimientos del C. Administrador, de rentas de este Distrito en la cuotizacion que por giro en venta de mulas le hizo esa oficina en 20 de Marzo anterior, señalándole por nueve meses hasta fin de este año doscientos setenta pesos calculados sobre la realizacion de seis mil seiscientos cincuenta pesos, foja 3; advertido si no estaba conforme con ella, de ocurrir dentro de los cuatro dias siguientes á hacer su reclamo ante la autoridad política del mismo Distrito: lo que habiendo verificado, exponiendo que por no tener tal giro de venta de mulas, ninguna cuotizacion podia hacersele sobre una base que no existia, cuyo ocurso le fué devuelto por dicha autoridad con el acuerdo marginal que en él se ve á fojas 3: la boleta de fojas 4 en que se le prevenia enterase en la Administracion, dentro de tercero dia ochenta pesos cincuenta y cinco centavos inclasos los recargos aperebidos de embargo si no lo verificaba: la copia simple del acta de embargo, á fojas 6, por no haberse acordado nada, segun el quejoso y confesion de la Aduana, en el ocurso que en igual sentido dice haber presentado á la misma Administracion de rentas: la notifica-

ción que para el remate de las treinta piezas de manta embargadas, se le hizo en el documento de fojas 8; con cuyos actos dice haber sido violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 8, 16 y 17 del Código fundamental de la República, en las fracciones que señala. Visto el auto de este Juzgado por el que se mandó suspender dicho remate, é informe de la Administración con los justificantes que en testimonio acompaña, procurando demostrar, primero: que probado como dice estarlo que Sel ha introducido y vendido mulas en este suelo desde Setiembre del año próximo pasado á principios de Febrero del presente año, sin haber obtenido la patente respectiva, la oficina de rentas ha estado en su derecho al cuotizar á Sel como lo ha hecho; segundo: que no habiendo este pagado los derechos que causaba y le fueron asignados, se le embargó en uso de la facultad económico-coactiva; y tercero: que no siendo autoridad el Administrador, no ha debido poner acuerdo ó proveer el ocuso de Sel sobre su inconformidad con la cuotización, ni tenido obligación de hacérselo saber, por lo que no cree haber violado las garantías que otorgan los artículos constitucionales que invoca Sel á su favor. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal; la citación para sentencia con lo demás que ver convino.

Considerando: que habiendo desde un principio negado D. Manuel del Sel ejercer y haber ejercido el giro de ventas de mulas, por lo que no estaba conforme con la cuotización que se le hacía, ni con ninguna otra por no ser cierta la base ó hechos en que se fundaba, surgió desde ese momento un punto rigurosamente contencioso, pues ya no se trataba del mas ó menos de la cuota, sino de si debía ó no ser cuotizado D. Manuel del Sel por un giro que decía no ejercer, ni pensar ejercer; punto que aunque pareciera cuestión de hecho, envolvía necesariamente la prueba jurídica y el valor de ella para decidirse legalmente, lo que no era de la competencia de la Administración de

rentas, sino inconcusamente de la judicial.

Considerando: que vista la inconformidad de Sel para ser cuotizado, debió el Administrador limitarse á asegurar los derechos fiscales por medio del depósito de la cantidad cuotizada; y si el depósito era reusado, por medio del embargo de bienes equivalentes, poniendo estos á el depósito á disposición del Juez (artículos 2 y 28 de la ley de 20 de Enero de 1837), dándole cuenta con las diligencias y aun ministrándole las pruebas que hubiese, para que ante él hubiese sido Sel vencido por derecho, pues nadie sin ser oído y así vencido, puede ser penado.

Considerando: que nacida esa disputa sobre el origen ó causa del aduano, el derecho fiscal no era claro ó indudable para poder llegar hasta el remate de los bienes embargados, por lo que con haber hecho citación para este, desechando de plano la inconformidad de Sel manifestada por escrito á la oficina de rentas, sin siquiera proveerla como debió hacerse según los artículos antes citados y el 18 y 20 de la propia ley, así como el octavo de la Constitución federal, esta oficina se excedió traslimitando sus facultades, pues de hecho falló sobre un punto que no era de su competencia, cual era de si Sel era ó no cuotizable por comercio de mulas, supuesto negar él haber tenido, tener y ni aun pensar ejercer tal giro, con lo que se violaron las garantías de que se queja, prescindiendo de que sin ser giro nuevo ó nacido en este año, no se le cuotizó á su debido tiempo, según la ley de hacienda del Estado, de lo que también debió conocerse ante el Juez competente respectivo.

Considerando: que aunque después de la citación para remate que no se llevó á efecto por haberlo mandado suspender este Juzgado, se promovió la información ad perpetuum que se acompañó al informe de la oficina responsable, esa información no puede privar á Sel de su derecho al amparo, por que la violación de las garantías de este estaba ya consumada, desde que verificado el em-



barago, no se remitió la cuestión á la autoridad á quien tocaba decidirla, cual era el Juez de hacienda de esta Capital, sino que se desechó de plano la oposicion del escrito de Sel, fallándola tácitamente, y se otó para remate sin haber sido Sel vencido por derecho en el juicio correspondiente.

Considerando respecto de la informacion *ad perpetuam*: que semejantes informaciones está prohibido se reciban como inútiles en negocios concernientes al fisco, por su inejecacia para probar, y si por tal motivo se prohíbe á los particulares servirse de ellas contra el Erario, esto por la propia razon no puede servirse de medios que él reprueba, contra aquellos (Circulares de 18 de Marzo y de 10 de Octubre de 1862 y la de 2 de Noviembre de 1868, con la ley 2 tít. 16 Part. 3 que cita la segunda): por lo que el punto de la cuotizabilidad de Sel debe reputarse prejuzgado, pues ni la ciencia privada de la oficina cuotizadora por evidente que se suponga, ni la referida informacion *ad perpetuam* levantada posteriormente, pueden justificar haber llegado hasta la citacion para remate y desechándose de plano el curso contra la base y origen de la cuotizacion.

Considerando: que aunque la omision del proveido al citado recurso y su notificacion pretende exculparla la oficina de rentas diciendo no ser autoridad, que es á quien impone tal obligacion el artículo octavo constitucional, la misma Oficina en su informe, á fojas 17 frente, se reconoció serlo y competente para expedir por escrito sus órdenes, motivando y fundando en ley vigente y expresa la causa de su procedimiento: de que se sigue, que si se ejerció autoridad competente para lo uno, debió ejercerse lo mismo para lo otro; y que como obedeció el artículo 16 que habla de autoridad debió tambien obedecer el octavo que habla de lo mismo: y que en efecto, para proveer el recurso y dictar sus providencias hasta la de depósito ó embargo estaba en su derecho y era la autoridad privativa de ello; mas no así para

no proveer ni notificar, ni para decretar remate y citar para él, sin el previo juicio sobre la cuotizabilidad de Sel ante el Juez competente. Y habiéndose con estos hechos violado las garantías que otorgan los artículos octavo 14, 16 y 17 del Código Fundamental de la República, se decretar:

Primero: que la Justicia Federal ampara y protege á D. Manuel del Sel, contra algunos de los procedimientos que quedan indicados de la oficina de Rentas de esta Capital.

Segundo: notifíquese al interesado y hágase saber al C. Promotor, previniendo al primero que en el acto de la notificacion ponga con el papel del sello correspondiente el del quinto que se ha invertido en este juicio y el valor del último suplido por este Juzgado.

Tercero: séquense las copias respectivas para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República y periódico oficial del Estado, y remítase el original de este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador, Juez interino de Distrito del Estado de Morelos, por auto mi de que doy fe.—*Mariano Sansalvador*.—Una pública.—*José Anastasio Rego*, secretario.—Una fábrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca. Mayo 3 de 1873.—*J. Anastasio Rego*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 29 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Morelos por D. Manuel del Sel, contra los procedimientos del Administrador de rentas de Distrito de Cuernavaca en la cuotizacion que por giro en venta de mulas le hizo en 20 de Marzo

último, señalándole por nueve meses hasta fin del presente año doscientos setenta pesos, calculados sobre la realización de seis mil setecientos cincuenta pesos, advirtiéndole que si no estaba conforme, ocurriese dentro de los cuatro días siguientes á hacer su reclamación ante la autoridad política del mismo Distrito, lo que verificó del Sol exponiendo, que por no tener tal giro, ninguna cuotización podía hacersele, sobre una base que no existe, y cuyo ocuso le fué devuelto con el acuerdo marginal que en él consta: vista la boleta en que se lo previene, que dentro de tercero día entere en la administración ochenta pesos cincuenta y cinco centavos, incluidos los recargos; apercibido de embargo si no lo verificaba: vista la copia del acta de embargo, por no haberse acordado al ocuso que el quejoso presentó á la administración de rentas, vista la notificación para el remate de treinta piezas de manta que se embargaron á Sol, usándose de órden de la Administración, de la facultad económico-coactiva; el informe de la autoridad responsable, con lo pedido por el Promotor fiscal; las pruebas rendidas por la autoridad responsable para justificar su informe; la ley de hacienda del Estado de Morelos exhibida como prueba por parte del quejoso; el pedimento del Promotor fiscal producido en lugar de alegato; la sentencia pronunciada por el Juez del referido Estado el día 8 del actual, y teniendo presente todo lo demás que convino. Considerando: primero; que Sol ha negado tener el giro de venta de mulas, por cuya causa se le ha cuotizado y se lo mandó embargar por la Administración de rentas del Estado de Morelos, lo que ha dado lugar á una contienda sobre aplicación de la ley de 25 de Octubre del año próximo pasado, promulgada por dicho Estado, que hace forzosas las actuaciones judiciales segun previene el artículo segundo de la ley de 20 de Enero de 1837, que erigió la facultad económico-coactiva, en cuyo caso esa facultad no debe extenderse hasta el remate de los bienes que

TOMO IV.—PARTE II.

en virtud de ella se hayan embargado. (Ley citada de 1837.) Segundo: que tanto el decreto del Estado de Morelos al referirse en su artículo veintisiete al de 30 de Noviembre de 1838, así como este al conceder á los recaudadores la facultad de proceder también al remate de los objetos embargados, es bajo el supuesto de que no se ofrezca contienda, como lo expresa el artículo tercero á la misma ley, y es de interpretarse conforme á la Constitución, supuesto que las funciones judiciales no pueden encomendarse á la autoridad administrativa. Tercero: que de todo esto resulta, que el administrador de rentas de Cuernavaca se ha excedido en el uso de sus atribuciones, al proceder al remate de los objetos que embargó á D. Manuel del Sol en 28 de Marzo anterior, por carecer de toda facultad judicial; quedando por lo mismo, violadas en la persona del promovente las garantías consignadas en el artículo diez y seis de la Constitución general de la República; se decreta: que la justicia de la Unión ampara y protege á D. Manuel del Sol, contra los actos del administrador de rentas del Distrito de Cuernavaca, posteriores al embargo que se le hizo por dicha oficina en 28 de Marzo último.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Cruzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico México, Setiembre 19



bre 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## CIRCULAR

### *Sobre notificación de sentencias.*

#### PEDIMENTO FISCAL.

“El fiscal dice: que muy repetidas veces ha notado que los tribunales de circuito, al pronunciar su sentencia de vista, si la causa ha sido instruida en los juzgados de Distrito situados fuera del lugar en que reside el tribunal, previenen que la sentencia se notifique por medio de exhorto, y sin esperar que se devuelva diligenciado, sin estar ciertos de si el reo se conformará ó no con el fallo de vista, cuando es diverso del de primera instancia; de si interpondrá ó no algun recurso, remiten la causa á esa Suprema Corte, poniéndola entónces en la necesidad de ejecutar ciertas diligencias, que hasta cierto punto le son ajenas, y en vacilacion al ministerio público para pedir en lo principal. Porque en efecto, y ya se ha dado el caso: al pedir la confirmacion ó revocacion del fallo de un tribunal de Circuito, y cuando procedia solamente la designacion del día para la vista, esa sala ha tenido necesidad de mandar notificar al reo para que nombre defensor; al practicar esa diligencia resulta, que el reo se conforma con el fallo del tribunal de Circuito, y que la sentencia de segunda instancia queda ejecutoriada, y la causa vuelve al ministerio público para que pida en lo tocante al punto de responsabilidad. Otras veces sucede como ahora, que puestos en libertad los encausados, no se les halla, y algunas veces esto pasa cuando hay sócios que sufren todas esas dilaciones y perjuicios, y todo por no haberse observado en la segunda instancia un procedimiento regular y conforme á las leyes, y aun á las prevenciones de esa Suprema Corte.

Esa sala ha determinado, en diversas ocasiones, que antes de que los Tribunales remitan las causas en grado á esa Suprema Corte, cuiden de advertir á los reos nombren defensor que los patrocinen en tercera instancia; y en caso de no tenerlo, se les muestre la lista de los de oficio, para que de entre ellos elijan el que deba patrocinarlos. Esa disposicion implica naturalmente esta otra: que no se remitan las causas sino despues de notificada la sentencia, y saber el resultado final de esa notificacion. Todo esto corresponde, está en la jurisdiccion del tribunal, y es exclusivo de sus atribuciones.

El fiscal cree, que para obviar en lo sucesivo los inconvenientes á que dá lugar la práctica abusiva que se ha introducido, respecto del punto que se viene tocando, seria bueno prevenir, por medio de circular á los tribunales de Circuito, con escepcion del Tribunal superior del Distrito, porque sus procedimientos en la materia están bien arreglados, que luego que hayan pronunciado sus sentencias y las manden notificar, en su caso, por medio de exhortos, y previniendo tambien en su caso respectivo, se advierta á los reos nombren defensor en los términos que se dejan indicados; ó aun cuando solamente sea para la simple notificacion de la sentencia de vista, porque esta causa ya ejecutoria con arreglo á las leyes, se abstenga de remitir los procesos á esa Suprema Corte, hasta que hayan sido devueltos diligenciados los expresados exhortos y unidos á sus respectivos tocos. De esa manera vendrán ya en su verdadero estado para ser revisadas en grado ó en simple revision; y se ahorrarán diligencias, que sobre ser gravosas al recargado trabajo de esa Suprema Corte, entorpecen la buena administracion de justicia.

Mexico, Noviembre 5 de 1873.—*Altamirano*.